

## El Futuro que no fue: Tres Tesis sobre la Arqueología Chilena Contemporánea

Simón Sierralta Navarro<sup>1</sup>

### Resumen

Se discute respecto del rol que jugaron el Golpe de Estado de 1973 y la última Dictadura cívico-militar, en tanto procesos fundacionales del Chile contemporáneo, en el desarrollo de la ciencia arqueológica y de las condiciones actuales en las que esta se desenvuelve. Se problematizan trabajos previos respecto a la historia de la arqueología chilena en el siglo XX, y frente a planteamientos recientes que han abogado por abandonar parcialmente los esfuerzos historiográficos sobre la disciplina, se contraponen la idea de que el debate interno debe realizarse sobre una historia que ha sido poco visibilizada. Sobre esa base, se proponen tres tesis de provocación que buscan volver a pensar sobre temas hasta ahora pasados por alto, a partir de las cuales se plantean diversas aristas problemáticas, en general vinculadas con la relación entre la práctica arqueológica y la sociedad en general, buscando sus expresiones en los hechos históricos concretos.

*Palabras clave:* arqueología chilena, Golpe de Estado, Dictadura, proceso histórico, debate

### Abstract

This paper examines the impact of the 1973 Coup d'état and the military-civic dictatorship, as foundational processes of modern Chile, on the development of Archaeology and the current conditions under which it is conducted. Previous assessments of the history of Chilean Archaeology in the 20th century are examined. Although recent publications have urged for an abandonment of historiographic efforts, I argue that an internal debate must be done based on the analysis of a partially invisible history. On the bases of that premise, I propose three 'incitement theses' that question themes thus far ignored. These theses put forward issues associated to archaeological practice and society, and their relationship with historical events and processes.

*Keywords:* *chilean archaeology, Coup d'état, Dictatorship, historical process, debate*

En el último tiempo, una serie de coyunturas políticas a nivel nacional han mostrado la relevancia contemporánea del patrimonio histórico-cultural como escenario de disputa respecto a los sentidos comunes de construcción de la sociedad. Discusiones y conflictos en torno a la definición de sitios de memoria, o la reivindicación de figuras y orgánicas de la izquierda institucional y revolucionaria, así como de funcionarios civiles de la Dictadura y militares condenados por crímenes de lesa humanidad, han mostrado que no era tal aquella transición que se había dado clausurada con el primer triunfo presidencial de la derecha en 2009 (ver *infra*). Se volvió patente que, pese a las promesas de 1990, aún no estamos de acuerdo en la historia que debemos contar. En diversos

<sup>1</sup> Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile. simon.sierralta@uach.cl

espacios, y con distintos resultados, parece haberse revitalizado la discusión respecto a los límites y las direcciones de construcción de la historia en tanto memoria social, por una parte, y en tanto verdad nacional, por otra (Rubio 2012; Monsálvez 2016; Valdés y Fauré 2018). Por supuesto, el nudo principal del asunto se ha desarrollado en torno al proceso histórico comprendido por el gobierno de la Unidad Popular, el Golpe de Estado, la contrarrevolución neoliberal y el proceso de resistencia y restauración democrática a finales de la década de 1980. Consensos y silencios, que se habían establecido con pretensión marmórea durante las primeras dos décadas de la transición, han sido cuestionados desde perspectivas múltiples, en un escenario internacional de crisis económica generalizada y agudización política creciente (Cortés 2018; Garretón 2016). Esto no expresa solamente una contingencia específica de instrumentalización ideológica de la historia o el patrimonio, sino que revela la existencia de una fisura estructural en la sociedad chilena de posdictadura, relacionada sobre todo con las estrategias de opacidad que se utilizaron para legitimar la continuidad del proyecto neoliberal (Gaudichaud 2015). Tal parece ser que no existe un relato público sincero respecto a cómo llegamos hasta aquí.

Pero ¿qué tiene que ver eso con la arqueología? Frecuentemente se ha señalado la relevancia de la memoria histórica en tanto herramienta para dotar de sentido los caminos del presente. Con justa razón, cualquiera de nosotros podría acudir al lugar común de situar parte importante del valor del patrimonio cultural –y en particular del patrimonio arqueológico– en su condición de testimonio vivo de la historia. Probablemente por ello, uno de los ejercicios que se acometen periódicamente es el de testimoniar y revisar críticamente los procesos que, desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX, han dado forma a los escenarios específicos de la arqueología y su práctica, con diversidad de escalas geográficas y temporales (v.g. Carrión *et al.* 2015; Castro 2014; Castro y Núñez 1995; Orellana 1991, 1996; Politis 2003; Salazar *et al.* 2012; Troncoso *et al.* 2006).

Considerando lo anterior, existen dos cuestiones –cauces paralelos y retroalimentados– en que me parece que la arqueología chilena de las últimas décadas no ha reflexionado suficiente. Una de ellas ya ha sido planteada inicialmente por Ballester (2016a), y corresponde a la reflexión respecto del impacto que tuvieron el Golpe de Estado, la Dictadura cívico-militar, y su construcción social continuada por la Concertación, en el desarrollo concreto de nuestra disciplina y en su estado actual. La segunda ha sido abordada en términos locales por algunos trabajos previos (Ayala 2014, 2017; Sierralta 2017; Vidal 2019), pero no ha tomado una forma teórica general y sólida, y refiere a la autorreflexión respecto del componente ideológico en la interpretación y la producción del discurso histórico en arqueología, y las consecuencias que el volcamiento hacia la sociedad civil de ese contenido ideológicamente cargado tiene en la construcción social más allá de los aspectos patrimoniales. En otras palabras, el entender la arqueología como Ciencia Social no exclusivamente en el sentido de que estudia problemáticas *sociales* en el pasado, sino también en tanto reflexiona sobre sí misma dentro de su contexto.

Quiero decir con esto último que hay una perspectiva que la arqueología chilena mayoritariamente ha pasado por alto, y que hace un contrapunto al intercambio de Ballester (2016a) y Berenguer (2016) respecto del carácter social –o no– de la praxis disciplinar local. Mientras el primero quiso descolocar nuestra *vox populi* contemporánea al respecto, señalando que “la sociedad como temática está casi completamente exiliada de nuestra arqueología” (Ballester 2016a: 98), el segundo atribuyó esto al capricho *millennial* de una generación que “siente que aún no regresan cosas que los mayores estiman ya retornaron.” (Berenguer 2016: 108). Pero finalmente, como concluía al final de su réplica, la distancia entre ambos no parecía tanta, pues la discusión se centraba en apreciaciones que, desde

una óptica particular, piensan que la de enfrente no da el salto hacia el objeto de conocimiento *correcto* desde el objeto de estudio que caracteriza nuestra ciencia. En fácil, que no están buscando en el pasado lo que hay que buscar.

Aunque sin duda agitó las aguas de una discusión necesaria, quisiera retrotraerme aún más allá de lo que lo hizo Ballester en su *revival* de la voz de los '80, y así cerrar esta introducción desempolvando un nudo crítico que me permita abordar los dos brazos del río que he propuesto. En 1971, la Comisión de Ciencias Humanas del Primer Congreso Nacional de Científicos aprobaba un informe redactado por Julio Montané, que expresaba que “el futuro de la arqueología no es otro que el futuro de los chilenos. En la medida que el pueblo de Chile forja su camino, la arqueología también sabrá ir encontrando el suyo” (Montané 1972: 4). Al año siguiente, un grupo de investigadores con base en la Universidad de Chile Sede Antofagasta, particularizaban ese futuro en un párrafo tajante:

“La investigación arqueológica deberá aportar a nuestro actual proceso todas las particularidades de nuestra realidad, pasada y presente, teniendo en mente que, sin una racional lucha ideológica, las formulaciones teóricas y consecuentemente prácticas [no] darán una clarificación al destino de la arqueología regional. Es necesario reiterar que el futuro de la arqueología está en el futuro de Chile y bajo estos términos entendemos que la situación general del país repercute en el desarrollo de esta ciencia del hombre” (Montané *et al.* 1972:12).

Sobra decir que tras el Golpe de Estado el devenir de Chile y su arqueología fueron radicalmente distintos a lo que dicho programa pretendía. Al respecto, mi primera tesis o provocación es que, en lo tocante a nuestra disciplina, dicho evento y sus consecuencias no han sido abordados públicamente con el detalle que amerita como hecho fundacional del Chile contemporáneo. Mi segunda provocación, quizás algo obvia, es que la concepción global que los arqueólogos chilenos manejan sobre la arqueología, su discurso, la prehistoria y la Historia en general, está determinada por el proceso político-social que comenzó en 1973, se consolidó a partir de 1988, y sigue aún en desarrollo. Mi tercera tesis, por último, es que la falta de reflexión sobre las dos anteriores, pese a las habituales declaraciones de compromiso social en la práctica arqueológica, ha determinado la incapacidad de sobreponerse a los marcos institucionales y políticos impuestos, estableciendo un escenario de progresivo alejamiento entre la arqueología y su realidad social. Desarrollar y discutir más acabadamente estas ideas es una tarea de largo aliento, que debiese ser abordada colectivamente a partir de la reactivación del debate político en el seno de la arqueología chilena. Por ello, mi expectativa aquí no es presentar una resolución del nudo del problema, sino ofrecer, en tanto arqueólogo chileno (i.e. desde dentro del mismo intrínquilis), algunas perspectivas que pudieran aportar una nueva vieja mirada sobre la vieja nueva cuestión.

## Primera tesis – El golpe a la disciplina

Decir simplemente que no se ha dicho nada sobre los efectos del Golpe en la arqueología chilena sería faltar a la verdad. Las primeras reflexiones publicadas al respecto corresponden a trabajos de síntesis de la historia de la disciplina en los que Mario Orellana (1991, 1996) revisaba y actualizaba las propuestas historiográficas que había hecho algunos años antes (Orellana 1982), con el objeto de comprender su desarrollo y explorar sus potencialidades futuras. Contrario a la tesis aquí planteada, Orellana parece considerar allí a la Dictadura como un período significativo, pero no fundamental,

incluido dentro de un proceso general de renovación disciplinar que se extendería entre 1960 y 1990.

En ese sentido, relata en primera persona un escenario nacional en el que las posiciones marxistas “dogmáticas y uniideológicas” (Orellana 1996:26), que aparecían también en la arqueología como una de las posiciones teóricas en el marco de su proceso de modernización, habían generado como respuesta una intervención militar que desembocó en el aplastamiento del espacio académico. De este modo, Orellana describe el panorama como “una situación política nacional que produjo una interrupción en el desarrollo normal de las disciplinas” (Orellana 1991: 17), alineándose así con las lecturas que ponían en el proyecto revolucionario la justificación de la brutalidad militar.

Su interpretación parece ser que a fines de los sesenta la arqueología chilena transitaba por un período de consolidación institucional conducido por él mismo y otros (como Grete Mostny y Bernardo Berdichewsky), pero que se veía tensionado por posiciones políticas destructivas y “alejadas del pensamiento crítico”, particularizadas sobre todo en la figura de Julio Montané (Orellana 1996:16, 175). Pese a ello, esta fuerza modernizadora, vinculada al proceso general de Reforma Universitaria, había permitido dar un salto cualitativo en términos institucionales, conformando escuelas de formación, grupos de investigación, y la Sociedad Chilena de Arqueología, lo que parecía augurar un futuro auspicioso para la disciplina. Luego, y aunque inicialmente establecía como propuesta historiar la arqueología hasta 1990, Orellana parece cortar el relato abruptamente con el Golpe de Estado, señalando en términos generales que la intervención militar había constituido un freno en el natural desarrollo de las tendencias que se desarrollaban desde los centros académicos. Sin embargo, y quizás en forma algo sorprendente, en sus conclusiones relativiza el efecto de este freno, pues termina concluyendo simplemente que, “a partir de 1960, se ha podido observar una organización más compleja de la disciplina, más institucional, en donde los museos y universidades han jugado un papel importante, agregándose a ellas la Sociedad Chilena de Arqueología” (Orellana 1996: 190). Es decir que, tras discutir ampliamente la importancia del contexto sociopolítico para el desarrollo de la disciplina hasta 1973, parece establecer que las últimas dos décadas le habían pasado relativamente por el costado: pese a la intervención institucional y los recortes presupuestarios, se había logrado mantener la máquina en marcha –con discursos cuidados y trabajo silencioso– hasta la liberación de 1988-1990. Si se quiere, habían sido años de una arqueología de baja intensidad, pero que en el marco de esta historia algo evolucionista no transformaba la dirección de los acontecimientos. Una opinión similar es la de Cornejo (1997:13), que se remite a señalar las condiciones de represión como el marco general en el que se producía el avance profesionalizante de la arqueología.

Troncoso *et al.* (2006, 2008) parecen haber hecho eco en algún grado de dicha lectura. Aunque sin la visión crítica de Orellana respecto de las posturas materialistas históricas y su rol destructivo, en tensión contra propuestas más moderadas y enraizadas en el historicismo cultural y el ecologismo anglosajones, su lectura de los efectos del Golpe de Estado es similar. El panorama desde finales de la década de 1960 mostraba una progresiva institucionalización promovida por el Estado, a través de la promulgación de la Ley de Monumentos Nacionales, y las instituciones académicas que impulsaban la reforma y fomentaban la organización progresiva de los investigadores. La intervención militar habría implicado el cierre institucional y el silencio teórico a través de la represión y del exilio. A partir de ese momento, se desarrollaría la “arqueología en el silencio” (Troncoso *et al.* 2008:128). Siempre desde un punto de vista predominantemente teórico, analizan en mayor profundidad lo ocurrido durante la Dictadura, caracterizando esta arqueología de baja intensidad (*sensu* Vásquez León 2003): proponen que las condiciones políticas reorientaron la mirada arqueológica para coger como

referentes los trabajos norteamericanos, y que aquellos que habían rondado la mesa del marxismo se ocultaron en el materialismo del procesualismo. El positivismo hegemonizaba el panorama epistemológico, subsidiado por la implantación progresiva de sistemas de financiamiento basados en la competencia. Asimismo, postulan una nueva dimensión para explorar: si el período anterior mostraba una efervescencia y un impulso teórico que, además, promovía la apertura internacional y la discusión amplia con arqueólogos de otros países, expresada en la colaboración con científicos de múltiples nacionalidades, con la Dictadura se produjo un cierre interno, que se observa tanto en una disminución del acervo bibliográfico y la magnitud de la discusión teórica en términos globales, como en el desarrollo de una “microarqueología’ fundada en lo local que reprodujo las condiciones de aislamiento del país en el contexto internacional” (Troncoso *et al.* 2008: 131).

Al disponer de una década más de perspectiva temporal que Orellana, Troncoso *et al.* (2006, 2008) logran delinear con bastante asertividad el escenario de la arqueología durante el ciclo concertacionista. En términos institucionales, exponen la grieta –aún en franca profundización– entre la arqueología académica y la de corte empresarial, y en términos teóricos proponen una tesis que ha pasado algo desapercibida para reflexiones posteriores (v.g. Carrión *et al.* 2015), pero que resulta bastante interesante, y más aún cuando hoy sendas camadas de investigadores jóvenes se especializan en la vieja Europa impulsados por el programa de Becas Chile (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 2019; Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 2020) “[desde 1973] la producción de la arqueología chilena ha seguido los lineamientos de las relaciones internacionales definidas y establecidas por el gobierno” (Troncoso *et al.* 2008:136). Por último, destacan el surgimiento marginal de una serie de prácticas que respondieron a demandas contingentes determinadas por el cambio en las condiciones sociopolíticas y culturales a nivel mundial a fines del siglo XX: el involucramiento en casos de DD.HH., el desarrollo de trabajos de arqueología indígena, y el surgimiento de la cuestión patrimonial como una problemática (v.g. Ávalos y Ladrón de Guevara 2000; Ayala 2006; Cáceres 2011).

Más recientemente, el trabajo de Carrión *et al.* (2015) ha reflexionado sobre el devenir teórico y práctico de la arqueología nacional desde la perspectiva del proyecto histórico de la Arqueología Social Latinoamericana, el cual diagnostica como efectivamente erradicado a partir de la represión desatada en 1973. A partir de ello, centrándose en el período posterior a la restauración democrática, coincide en buena parte con el diagnóstico general de Troncoso *et al.* (2008) para realizar una evaluación crítica más específica, respecto de cómo “otras arqueologías” que se plantean desde el compromiso social, han fallado en retomar las tareas históricas de generar propuestas éticas, políticas y teóricas propias. Esto es atribuido por partes iguales a los efectos de los años de persecución del marxismo, al oportunismo teórico de los investigadores en los últimos treinta años, y a una hegemónica concepción normativa de la práctica científica sin dimensiones política e histórica (Carrión *et al.* 2015: 106).

En suma, los tres trabajos han abordado la cuestión del Golpe de Estado en forma general y poniendo de relevancia dos dimensiones: la intervención militar de las instituciones universitarias, y el modelamiento teórico que implicó la represión de los discursos con tintes marxistas, por un lado, y el favorecimiento de los marcos conceptuales procesuales norteamericanos. Se señala también, como un hecho de la causa, el exilio de Julio Montané y Luis Felipe Bate, entendidos como estandartes de la Arqueología Social Latinoamericana y luego un ejemplo de la extirpación de esta escuela del escenario teórico nacional. Por último, parecen coincidir en que el panorama de la arqueología tras la salida de Pinochet es un producto combinado de las estrategias de fomento

a la investigación desplegadas por la Concertación, y de una colectividad de arqueólogos en algún grado complacientes e individualistas.

A mi juicio, esta interpretación parece aún algo superficial para dar cuenta del alcance real de la intervención militar, pues se ha fundamentado en tres premisas correctas, pero demasiado generales: la intervención institucional, la represión teórica, y el exilio de algunos investigadores específicos. En ese sentido, discrepo con propuestas que abogan por superar los esfuerzos historiográficos (v.g. Ballester 2016a): historiografiar la disciplina con mayor detalle es aún una tarea pendiente para desmitificar los procesos vividos. Así, por ejemplo, Salazar et al. (2017) han desarrollado una extensa e interesante reflexión respecto al programa FONDECYT, su dimensión política y su efecto en el desarrollo de la investigación científica en arqueología, pero sin considerar que fue estructurado bajo la égida de Miguel Kast –uno de los principales ideólogos del neoliberalismo nacional– y Alfredo Prieto, ministro de Educación y colaborador de la CNI (Monckeberg 2017; Weibel 2017). Más allá de los nombres propios, esto pone de relevancia que el sistema actual de financiamiento a la investigación forma parte de un proyecto económico, político y de clase específico y de amplio alcance, que en este caso se expresó en un giro desde el foco en las instituciones universitarias del Estado, hacia uno en la competencia entre investigadores particulares.

Otro aspecto en común de las aproximaciones a la historia de la arqueología en los últimos 45 años es que todas parecen considerar el proceso vivido desde 1973 como una externalidad. Es decir, que las condiciones impuestas a partir del Golpe se configuran desde fuera de la arqueología, una disciplina que corría su historia independiente, introduciendo un factor disruptivo en lo que parecía su natural desarrollo en el seno de la República. Orellana (1991, 1996) sugiere una fractura temporal en el ciclo evolutivo de la arqueología, Troncoso *et al.* (2008) proponen más críticamente que la poca voluntad y reflexión de los investigadores implica su sujeción a los vaivenes de las políticas exteriores del Estado, y Carrión *et al.* (2015) adhieren a las tesis que los preceden poniendo especial énfasis en la despolitización producto del despliegue represivo. Ante la ausencia de una exploración historiográfica más profunda de la arqueología en esos años, parece difícil un ejercicio intelectual diferente: ¿con qué argumentos? Pero sin duda, la relación de la ciencia con la política no es la de una cáscara de nuez transportada *a piacere* por las mareas cambiantes de la realidad social, sino una parte integrante de ellas, en cuyo seno residen y se desenvuelven las propias expresiones de dichos procesos al tiempo que dialogan con el contexto general.

La dimensión interna de la historia se expresa, en parte, en el natural involucramiento de arqueólogas y arqueólogos en la dinámica del período. No se trata de una comunidad cerrada, ni es la disciplina una entidad abstracta, que pudiesen ser simplemente intervenidas o influidas por agentes externos o la mano omnipotente del Estado. Por el contrario, existen múltiples puntos de intersección entre el proceso que desembocó en la Unidad Popular, por un lado, y la reacción golpista por el otro, en los que participaron investigadores y estudiantes. Los registros son escasos, pero elocuentes. Montané y el núcleo de investigadores de Antofagasta –Patricio y Lautaro Núñez, Víctor Bustos, Branko Marinov, entre otros– y su diagnóstico de la arqueología nacional y nortina con miras a la construcción del socialismo (Montané 1972; Montané et al. 1972); la organización del Primer Congreso del Hombre Andino en 1973; o la invitación de la Universidad de Concepción a Luis Lumbreras, que desembocara en su libro *La Arqueología como Ciencia Social*; son pequeños ejemplos de una parte del asunto. La lista de personas que, según algunos testimonios (Lautaro Núñez, luego Jorge Hidalgo y también Hans Niemeyer, en Castro y Núñez 1995:16–18), Mario Orellana habría entregado al rector militar de la Universidad del Norte, el coronel Danyau, y que

de acuerdo a esos testimonios habría frustrado la realización del Congreso Nacional de Arica (no obstante, ver descargos en Orellana 1995:41-44), contrasta con el rechazo de Grete Mosny, a realizar una lista de funcionarios del Museo Nacional de Historia Natural (Julie Palma, en Castro y Núñez 1995:16). Otras historias, sin duda, permanecen por ahora sólo en la memoria de los involucrados. En todo caso, más allá de los juicios celebratorios o admonitorios que cada uno hará, y de las trayectorias personales que el trance histórico influyó, la pregunta que cabe hacerse es: ¿cómo puede haber afectado esto al desarrollo de la arqueología chilena?

Las aristas son numerosas y difíciles de explorar, por lo cual reafirmo la necesidad de reconstruir y pensar la historia con mayor acuciosidad. Tomemos por caso la pérdida de contingente humano -no reducida únicamente al emblemático exilio de Julio Montané y Luis Felipe Bate-, que implica la necesidad de ponderar, aunque sea subjetivamente, el impacto de la merma de una colectividad que daba el impulso definitivo hacia una arqueología consolidada académicamente (Troncoso et al 2006). A modo de ejemplo, escojamos tres nombres: Bernardo Berdichevsky, Julia Monleón, Guacolda Boisset. Sobre el primero, resulta innecesario abundar sobre sus aportes a la fundación de la arqueología científica en Chile, detenidos abruptamente por su autoexilio en Canadá (v.g. Berdichevsky 1963, 1964). Respecto a la segunda, en un trabajo anterior he argumentado sobre los aspectos políticos de la narrativa arqueológica nacional en el Gulumapu, y los dispositivos de segregación entre el pasado prehispánico y el pueblo mapuche contemporáneo (Sierralta 2017). La tesis de grado de Monleón (1976), daba un paso en un sentido algo diferente que integraba el discurso arqueológico con las comunidades vivas, pero que tras su exilio en España estuvo extraviado largas décadas hasta su reciente repatriación gracias a su hija (Roberto Campbell com. pers.). El caso de Guacolda Boisset, en parte expuesto por Ballester (2016b), es decidir: fue una de las principales artífices de la carrera de la Universidad del Norte, y una de las pioneras en la arqueología costera de Antofagasta, pero abandonó para siempre la arqueología cuando dicho proyecto fue cercenado por la mano militar.

Podrían sumarse otros nombres, recurrentes en testimonios que relatan los años anteriores al Golpe (Berenguer 2014; Castro 2014; Castro y Núñez 1995; Massone 2014; Brinck et al. 2019), como Zulema Seguel, Mario Rivera, Ángela Jeria o Freddy Taberna, ejecutado en Pisagua en 1973 (Núñez 2015). El punto, más allá del justo y necesario ejercicio de memoria histórica, es que esto tiene un impacto en términos prácticos en el desarrollo de la arqueología. Montané, independiente de su proyecto materialista histórico, había inaugurado la perspectiva geoarqueológica en Chile con propuestas de fechamiento de terrazas marinas y fluviales (Montané 1964, 1968a); al mismo tiempo, su trabajo en Tagua Tagua le permitía situar un contexto chileno en la discusión internacional, abordar cuestiones paleoclimáticas, y publicarse en *Science* (Montané 1967, 1968b). Boisset, igualmente innovadora, participaba de la vanguardia que se abocaba a la crítica de los vetustos marcos cronológicos para el Norte Grande, con excavaciones sistemáticas y fechados radiocarbónicos más bien inéditos entre investigadores chilenos de la zona (Ballester 2016b; Boisset y Llagostera 1971). Zulema Seguel era la mano conductora del proyecto de la Universidad de Concepción. Luis Felipe Bate, aunque apenas comenzaba su carrera, ya proponía metodologías más actualizadas de análisis lítico (Bate 1971), una especialidad que tras su exilio vio pasar veinte años de escaso desarrollo hasta la llegada de Donald Jackson a comienzos de los noventa.

Institucionalmente procede hacer una reflexión similar. Habitualmente se ha señalado que la Dictadura procedió a cerrar las carreras nacientes en Concepción y Antofagasta. Limitarse a esto resulta tan cierto como insuficiente. Desde su inauguración en los años sesenta, la Universidad de

Concepción no era sólo un nuevo espacio de formación de profesionales. Constituía un polo de desarrollo teórico y social significativo, que había logrado atraer a diversos investigadores nacionales e internacionales: Annette Laming, Luis Guillermo Lumbreras, Julio Montané, Milan Stuchlik, Jorge Hidalgo, Bente Bitmann, entre otros (Garbulsky 1998). La publicación de la revista *Rehue* buscaba amalgamar las distintas ramas de la investigación antropológica y, por otro lado, al revisar sus cuatro números, resulta un claro documento del rápido tránsito desde una perspectiva científica crítica a una perspectiva científica revolucionaria. Su cierre progresivo culminó en 1976, e implicó no sólo un espacio menos de producción y formación, sino la eliminación de un programa de desarrollo científico que apuntaba a la construcción de una arqueología y antropología diferentes. Incluso desde una perspectiva de la experiencia subjetiva, remitirse sólo a recordar su cierre parece eufemístico, considerando que buena parte del plantel de profesores fue encarcelado primero, y exonerado después (Castro y Núñez 1995; Garbulsky 1998).

El caso de la Universidad del Norte es similar. Además de constituirse como un espacio de formación de cuadros profesionales, fue un nodo de investigación crítica y de relaciones científico-políticas interprovinciales e internacionales, con múltiples expresiones orgánicas: la organización del Primer Congreso del Hombre Andino, la creación del Centro Isluga (Castro y Núñez 1995), y la articulación regional del Comité de Arqueología del Norte (Rivera 1972). Varios de los involucrados han señalado la inesperada disposición del rector designado, coronel Danyau, que tuvo una actitud diferente y durante su mandato trató de mantener la actividad académica, lo cual duró algunos años hasta que fue sustituido. Aun así, a los pocos años la destrucción del proyecto era total: “me acerqué a Lautaro [Núñez] con el fin de buscar una estrategia para salvar lo que quedaba de nosotros (3 de 30)” (A. Llagostera en Castro y Núñez 1995: 25, el destacado es mío).

No son estos los únicos ejemplos. Durante las décadas anteriores, la arqueología chilena había estado en un proceso permanente de descentralización. El Museo Arqueológico de La Serena poseía una tradición larga de investigadores que transitó desde los pioneros Francisco Cornely y Jorge Iribarren, hasta el trashumante Julio Montané, Gonzalo Ampuero y Mario Rivera. Arica contaba, independiente de la Universidad del Norte, con una tradición arqueológica que por razones lógicas puede retrotraerse hasta Max Uhle, y que en 1972 contaba con doce profesionales activos en la investigación que creaban el Centro Antropológico de Arica (Rivera 1972). En Magallanes, el Instituto de la Patagonia fue fundado por iniciativa privada en 1969, incorporó a Omar Ortiz-Troncoso cómo arqueólogo residente y comenzó en 1970 la publicación de los *Anales del Instituto de la Patagonia*, documento ineludible en la investigación del sur austral (Martinic 2009). Si a ello sumamos Valparaíso, donde tuvieron su residencia académica Jorge Silva y -nuevamente- Julio Montané, podemos pensar en un escenario, para principios de los setenta, con al menos seis polos de desarrollo académico relativamente autónomos, estructurados orgánicamente y con programas de investigación cuando menos en vías de consolidarse. Esto puede ser contrastado con la estructura significativamente centralista que ha mostrado el sistema FONDECYT desde 1982 a la fecha, como han mostrado certeramente Salazar *et al.* (2017). Quizás recientemente -40 años después-, con la apertura de carreras universitarias en la Universidad Católica de Temuco y la Universidad Austral de Chile, y el potenciamiento de instituciones como el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia en Aisén, parece comenzar a abrirse el espectro territorial de los núcleos de formación e investigación, esta vez sobre la base de iniciativas privadas.

Los efectos del Golpe y la persecución ideológica en términos teóricos sí han sido más analizados, principalmente gracias al enfoque particular de Troncoso *et al.* (2008). Por una parte,

resulta claro cuando se trata de aquellos que desde el exilio defendieron abiertamente las banderas del materialismo histórico y la Arqueología Social Latinoamericana, si bien esa es en parte una reflexión ex-post. La Arqueología Social Latinoamericana, como corriente de pensamiento, no existía aún para 1973: su documento fundacional, el manifiesto de Teotihuacán, fue trabajado dos años después, con Montané y Bate ya en el exilio (Lorenzo *et al.* 1979), y su desarrollo real como escuela teórica no ocurrió sino hasta la década de los ochenta. El antecedente más temprano del trabajo marxista de Bate (1974), *Orígenes de la comunidad primitiva en Patagonia* vio la luz cuando este ya se encontraba en México.

Por otra parte, la perspectiva crítica latinoamericanista no fue exclusiva de lo que más tarde se conoció como Arqueología Social Latinoamericana, y es difícil de estimar el impacto que tuvo a largo plazo el desplazamiento del interés teórico desde este enfoque hacia la línea directa con la producción estadounidense. En 1973, algunos simposios del Primer Congreso del Hombre Andino versaban sobre “El rol de la sociedad andina en el tránsito al socialismo”, las “Bases para la planificación del desarrollo de la sociedad andina en el norte de Chile” y los “Problemas básicos del estudio de la sociedad campesina pre-europea: la revolución campesina y el proceso de agriculturización”. La Universidad del Norte publicaba una bien desarrollada interpretación general de estos problemas en clave teórica marxista, señalando transiciones entre modos de producción y formaciones económicas (Núñez 1974), pero luego se había producido una transición rápida y forzosa hacia marcos teóricos de corte ecologista (Núñez y Dillehay 1978 [1995]). Diez años después del Golpe, en las Primeras Jornadas de Arqueología y Ciencia<sup>2</sup> (1983), las discusiones de una generación distinta giraban principalmente en torno a las propuestas de Clarke (Suárez y González 1983), Chang (Fernández y Cornejo 1983), la arqueología conductual (Berenguer 1983) o Watson, Redman y Leblanc (Gallardo 1983). En esta primera edición (1983), aún Luis Lumbreras fue el invitado de honor para la charla de clausura. Para la segunda (1984) ya lo fue Michael Schiffer. En un contexto más amplio, podríamos quizás contemplar el contraste de largo aliento de una academia que podía proponer como un referente a la Checoslovaquia comunista (Núñez 1969), y aquella que en 1997 invitaba a su Congreso Nacional a Lewis Binford e Ian Hodder para presenciar en vivo el debate anglosajón de la década anterior. Los ejemplos citados son un tanto específicos, y sin duda no pretendo proponer una lectura homogénea de los escenarios previo y posterior a 1973, pero aun así representan una parte significativa de la discusión científica de cada período.

Lo que presento arriba no es más que una breve recopilación de datos puntuales, por lo demás asistemática (algunos juzgarán antojadiza), desde algunas fuentes dispersas que dibujan un panorama quizás tan incompleto como el que he interpelado. Probablemente, aquellos que vivieron esos años, o parte de ellos, consideren que no digo nada nuevo, o que desde el desconocimiento agito aguas ya afortunadamente bien decantadas. Esta porción de la historia chilena no ha sido habitualmente fácil de abordar, y la arqueología no está exenta de aquello. No es gratuito que José Berenguer señalara, en la presentación de la publicación de las Jornadas por los 30 años de la Sociedad Chilena de Arqueología, que “La Mesa de la Generación de los ’70 fue la más complicada de editar” (Berenguer 1995: ii), y que a ello se debía el retraso de dos años en la impresión del documento. Una serie de testimonios individuales publicados se cortan abruptamente en 1973, remitiéndose a la remembranza

<sup>2</sup> Por razones entendibles, la evaluación de las últimas dos décadas que se realizó en la ocasión no mencionó en absoluto el tema del Golpe. Sólo Adriana Goñi esbozaba “se nos olvida que también hubo una etapa de la historia entre el 70 y el 73, donde se nos abrieron nuevos horizontes y tuvimos Jornadas donde se discutió casi lo mismo, pero con otra perspectiva. Ese mismo tipo de interpretaciones no pueden hacerse hoy día, porque estamos viviendo lo que estamos viviendo” (Suárez *et al.* 1983: 36-37).

de los luminosos años anteriores (Berenguer 2014; Castro 2014; Massone 2014; Núñez 2014). En ese sentido, lo que planteo, más que una interpretación alternativa, es la necesidad de volver a explorar más profundamente este proceso fundamental en nuestra constitución contemporánea, a través de los documentos, la memoria y nuestras propias herramientas conceptuales como profesionales de la historia. En esto, sin duda, la historia oral resulta fundamental, como lo muestran algunos de los testimonios citados. Seguramente muchos más hacen falta aún.

## Segunda tesis – La arqueología del Nuevo Chile

La práctica contemporánea de la arqueología en Chile tiene una serie de aspectos polémicos que han sido abordados por distintos autores. Estos cruzan escenarios diversos: la vinculación de la arqueología con la sociedad civil en general (Silva *et al.* 2017), la relación neocolonial con las sociedades y el patrimonio indígenas (Ayala 2007, 2017; Sierralta 2017; Uribe y Adán 2013), la amenaza de la disociación entre la producción científica –alojada principalmente en la esfera académica– y la arqueología empresarial (Cáceres 1999; Cáceres y Westfall 2004), el excesivo énfasis en la publicación de artículos en revistas especializadas por sobre la producción de formatos con mayor contenido (Gurruchaga y Salgado 2017), la profundizada dependencia teórica respecto de los centros globales de producción de conocimiento (Carrión *et al.* 2015; Salazar *et al.* 2012), la inexistencia de proyectos de investigación de largo plazo, y un etcétera que podríamos extender por varias líneas más.

Una salida fácil –y por lo demás certera– sería proponer que estos problemas no son exclusivos de la sociedad chilena, sino que expresan tendencias generalizadas a nivel regional y planetario, y que luego son la expresión local de las contradicciones generales de la ciencia en el marco de la globalización (v.g. Endere y Curtoni 2006; Franco 2017; Politis 2003). Pero reflexionar respecto a las condiciones históricas específicas que configuraron la realidad de la arqueología nacional abre la posibilidad de salir de dicha complacencia, sacudiéndose de la subordinación a las corrientes académicas y políticas mundiales que ya hace una década fuera puesta sobre la mesa por Troncoso *et al.* (2008).

Así las cosas, ¿cuál podría ser la “concepción global” de los arqueólogos y arqueólogas de Chile sobre su arqueología? Sin duda el objetivo generalizador exige simplificar un escenario que dista de ser homogéneo y vacío de disputas, pero quizás una buena estrategia sea revisar el más reciente esfuerzo compilatorio de la disciplina nacional. En su introducción a *Prehistoria en Chile* (Falabella *et al.* 2016: 19-21), los editores presentan una arqueología alojada en la antropología, construida sobre la colaboración de especialistas dentro y fuera de la profesión, que avanzó desde la restauración democrática gracias a tres factores: el financiamiento por concursos de CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), la formación de posgrado en Chile y el extranjero, y a una internacionalización que permitió integrar más rápidamente las teorías y metodologías del primer mundo. Al mismo tiempo, reconocen una apertura hacia lo indígena y lo patrimonial, sostenida sobre iniciativas del Estado y nuevos cuerpos normativos, y una deuda respecto de la relación con la sociedad. Por último, se plantea en una perspectiva nacional –evidentemente señalada en el título– en donde la prehistoria constituye parte de la narrativa de la “configuración de un país pluriétnico” (Falabella *et al.* 2016:21).

Aunque haría falta una medición objetiva, creo que la mayoría de la comunidad arqueológica nacional se encontrará relativa o parcialmente de acuerdo con lo descrito arriba. Digo parcialmente, porque sólo cuenta la mitad (o, más bien, menos de la mitad) del ejercicio profesional contemporáneo. Respecto a la arqueología empresarial o de impacto ambiental en el país, ámbito que moviliza la mayor cantidad de fuerza de trabajo en la disciplina, parece haberse cumplido el escenario vaticinado por Carrasco (2006) respecto a la profundización de la dicotomía entre la arqueología de investigación y la empresarial. Las reflexiones publicadas respecto a esta última datan de los inicios de su consolidación como esfera dominante de la práctica arqueológica (v.g. Cabeza 2001; Cáceres 1999; Cáceres y Westfall 2004; Carrasco 2006), por lo que el tratamiento en detalle de su situación e implicancias actuales escapa por el momento. Por ello correré el riesgo de generalizar a partir de juicios que parecen ser *vox populi*. Así, digamos que esta arqueología se ha caracterizado por permitir el mantenimiento de un contingente profesional importante, con salarios relativamente elevados, pero en condiciones de empleo precario, en la forma de una maquinaria permanente de trabajo de terreno con escaso tiempo para la reflexión científica, bajas tasas de publicación y altas tasas de recuperación de material y cobertura geográfica. La distribución espacial e intensidad del ejercicio se determinan por las dinámicas de inversión del capital nacional y transnacional, y luego –amén al modelo económico chileno– por los ritmos de la depredación extractivista. El trabajo de los sitios o áreas de proyecto cambia de manos de una fase a otra, muchas veces sin mayor comunicación ni coordinación entre los distintos equipos (un buen ejemplo son los trabajos arqueológicos asociados a la construcción del Puente Chacao, en que se han involucrado al menos tres equipos en dos décadas). Por otro lado, es claro que el dinero empresarial ha permitido el abordaje de contextos en una magnitud que el financiamiento estatal a la investigación nunca ha permitido, si bien por el momento con una producción científica que parece pequeña en comparación a los recursos involucrados, siendo ejemplos notables el valle del Mauro y el sitio El Olivar (Cartajena *et al.* 2014; Gómez y Pacheco 2016; González 2017; Méndez 2008; Santander y López 2012; López *et al.* 2012, 2015).

Resuelto lo anterior, de acuerdo a la segunda tesis haría falta caracterizar el proceso político-social desarrollado desde 1973 en adelante. Tomás Moulián (1997), con una figura retórica que parece llamarnos particularmente a los arqueólogos, argumenta respecto de la inicial intención militar de “crear un nuevo Estado sobre las ruinas del otro” (1997:30). Sobre los vestigios de la vieja República, algunos de los cimientos de la nueva podrían ser los siguientes: primero, el bloqueo de la memoria, o “la sensación de un presente que obliga, como destino inexorable, a restar sentido al pasado” (1997:32), la remisión al silencio del Chile (1818-1973) antes de Chile (1973-?)<sup>3</sup>, y de ese espacio liminal de traición y muerte acaecido sobre todo en la primera década de la Dictadura. Segundo, la despolitización de la sociedad civil o, más precisamente, de los cuerpos intermedios, fundamento del proyecto guzmanista (Mansuy 2016), y luego la fractura entre la esfera de la política partidista –reconceptualizada como la disputa por la administración tecnocrática del Estado– y el mundo privado del individuo. Tercero, el desplazamiento de cualquier forma no mercantil de producción y consumo en todas las esferas de la vida pública y privada, relegando el papel del Estado sólo a aquellos espacios que la empresa privada no puede o no quiere cubrir, y habitualmente bajo la forma del Estado subsidiario. Cuarto, la naturalización del consumo –nuevamente mercantil y privado– como la única forma de realización subjetiva de las personas. Y, por último, como corolario o síntesis de lo anterior, la desaparición o al menos precarización de todas las formas colectivas de vida social, desde las más elevadas –el Estado– hasta las más inmediatas –el sindicato, el colegio profesional,

3 El *Chile antes de Chile* (Berenguer 1997) de los arqueólogos fue coincidentemente publicado el mismo año que la obra de Moulián.

el club deportivo, etc.- y subsiguiente individualización de la misma. Evidentemente, este proceso-proyecto se encuentra aún en curso y está sujeto a flujos, resistencias, y transformaciones, que se expresan recientemente en experiencias de recomposición del tejido social en distintos espacios, pero sigue siendo aún hegemónico y triunfante.

Las formas de articulación de la arqueología chilena con el escenario descrito son múltiples. Me interesan particularmente dos. La primera es el relegamiento del rol del Estado a los espacios que quedan fuera de la esfera de acción o de interés de los sectores capitalistas. En arqueología, hasta el momento este espacio ha sido por excelencia la investigación, que aún no ha mostrado formas significativas de reproducción del capital monetario. Pero, además, a partir de los mecanismos de financiamiento a la investigación diseñados en Dictadura, esta participación del Estado ha tenido dos rasgos particulares: es de carácter subsidiario, y es en arreglo a la iniciativa individual. A diferencia de la investigación durante los años sesenta y setenta, que se configuraba a partir del financiamiento de instituciones como museos y universidades, el sistema de CONICYT establece la competencia entre investigadores individuales como principio rector (Salazar *et al.* 2017). Entre las implicancias de esto se encuentra la dificultad de generar programas de investigación a largo plazo, puesto que la disponibilidad de recursos en el tiempo es incierta; la necesidad de priorizar el desarrollo de una carrera profesional en razón de indicadores que permitan competir, por sobre la persecución de objetivos más significativos en términos científicos y sociales<sup>4</sup>; la atomización del campo investigativo al poner el énfasis en personas por sobre colectivos, por nombrar algunas.

Por otro lado, si el acceso a los fondos de investigación y a posiciones de importancia dentro del campo científico están sujetas a indicadores de productividad individuales cuyo fundamento es el sistema mundial (i.e. europeo/norteamericano), es evidente por qué la mayoría de la producción arqueológica se alimenta de los estándares metodológicos y matrices teóricas que se sitúan como hegemónicos en Londres, Barcelona, París o Pittsburgh; y por qué la principal camada de investigadores jóvenes (i.e. sub-35) está optando por especializaciones de posgrado en universidades de ese orden de ciudades.

Esto permite ejemplificar a favor de una reflexión en un sentido más historiográfico respecto del Golpe y sus efectos en la arqueología nacional. Pues tomando lo anterior en cuenta, y considerando la tesis de Moulian (1997) respecto de la destrucción intencional del Chile Anterior, se puede interpretar mejor la inmediata acción militar en contra de los espacios que se configuraban como equipos de investigación con programas colectivos de largo plazo, a saber, las universidades de Concepción y del Norte, que de otro modo podría parecer un ensañamiento innecesario si el objetivo era meramente detener el proceso socialista.

Otra cara del proceso de marginalización del Estado corresponde a la esfera formativa. Tras la desarticulación de las carreras universitarias provinciales, recién hacia principios del siglo XXI la Universidad de Tarapacá abrió un espacio distinto al capitalino para la educación de nuevos cuadros de arqueólogos. En el contexto anterior a la entrada en vigor del Sistema de Evaluación Ambiental en 1997, el campo de ejercicio profesional para arqueólogos era exiguo, preocupación que se arrastraba al menos desde los años ochenta (Berenguer 1983, 1986, 2016). La arqueología resultaba una mercancía poco atractiva. Hoy en día, ante una alta demanda de fuerza de trabajo arqueológico, salarios atractivos, y una industria universitaria orientada al mercado, el escenario ha cambiado y

<sup>4</sup> Con múltiples consecuencias, siendo quizás una de las más complejas la subordinación teórica, metodológica y formal a los estándares de las publicaciones de alto impacto del mercado científico mundial (Gurruchaga y Salgado 2017).

hay espacio para un contingente de mano de obra importante. Pero a diferencia de los años sesenta, en que la ampliación de los nodos de formación de arqueólogos fue por cargo del Estado, esta vez existe la posibilidad de reproducir el capital dinero en el mercado de la educación superior. Esto, sumado a la precarización progresiva del sistema de universidades públicas, ha implicado que en el último sexenio se hayan abierto cuatro nuevas carreras, dos de ellas en provincias al sur de Santiago, y todas en instituciones privadas: Pontificia Universidad Católica, Universidad Católica de Temuco, Universidad Alberto Hurtado y Universidad Austral<sup>5</sup>.

Las consecuencias de esta privatización de la formación universitaria -y de la mano con ello del fomento a la investigación- aún están por verse, por cuanto los casos anteriores de la Universidad Internacional SEK y la Universidad Bolivariana no lograron consolidarse como referentes institucionales significativos a largo plazo. Haciendo algo de ficción, al menos en primera instancia, puede que la ampliación de la matrícula y la incorporación de instituciones menos elitizadas que la Universidad de Chile permitieran una diversificación de la composición geográfica y de clase de los profesionales de la arqueología, ampliando el abanico potencial de perspectivas a desarrollar en la investigación y divulgación arqueológicas. Al mismo tiempo, dadas las características del sistema universitario chileno, es posible que este proceso se realice sobre la base de la segmentación de acuerdo a las características de los postulantes, lo cual en otras disciplinas se ha visto significativamente asociado a la trayectoria laboral posterior (Muñoz y Blanco 2013; Rufinelli y Guerrero 2009). Considerando la ampliación de un mercado laboral de alta demanda en el impacto ambiental, y la disminución de fondos y fomento a la competencia individual en el financiamiento a la investigación, una expectativa razonable es que a futuro se reproduzca esta segmentación en las posiciones ocupadas dentro de las esferas laborales y científicas, quizás en línea con lo descrito para el París de los años '70 por Bourdieu (1984 [2014]).

### Tercera tesis – De la comodidad a la superación

Finalmente, mi tercera provocación sugería que la poca reflexión sobre el escenario descrito ha implicado que la arqueología chilena no haya podido generar estrategias de superación a los marcos institucionales y políticos dispuestos por la Dictadura. En cierto modo que, en general, la disciplina ha encontrado un espacio cómodo donde alojar su práctica -de investigación y empresarial- dentro de la estructura económica, social y política que delineó la revolución neoliberal. Por una parte, en algunas esferas es evidente la complacencia por una comunidad científica que ha alcanzado una productividad e impacto académicos innegablemente elevados en términos de publicaciones indexadas, especialmente en comparación a otras disciplinas en el escenario nacional (casos ejemplares en Cornejo 2017; Pimentel *et al.* 2016; Santoro *et al.* 2013). Esto se ha realizado sobre todo bajo el amparo del sistema FONDECYT, que ha permitido desarrollar excepcionalmente las carreras académicas de algunas generaciones de investigadores que ingresaron a él principalmente durante los años ochenta y noventa, y que hoy con las recientes reformas que han introducido los proyectos de Iniciación se naturaliza como el camino a seguir para las nuevas camadas doctorantes en Chile y el extranjero. Llama la atención que, a más de 30 años de su inauguración, este mecanismo de financiamiento y sus implicancias científicas, políticas, teóricas y prácticas, no han sido sujeto de reflexión y crítica, salvo algunos casos puntuales (v.g. Gurruchaga y Salgado 2017; Salazar *et al.* 2017).

---

5 No deja de llamar la atención que tres de estas instituciones corresponden a universidades confesionales

Por otro lado, de acuerdo a la información disponible en línea, desde 2011 se han ingresado al SEIA proyectos equivalentes a más de 400 mil millones de dólares<sup>6</sup>. El 74% de dicha cifra corresponde a inversiones energéticas y mineras. Sería un trabajo arduo estimar los montos involucrados en los estudios de arqueología, pero es innegable que la absorción creciente y proyectada de mano de obra en nuestra disciplina se sostiene sobre la profundización extractivista y la baja diversificación de la economía nacional que caracterizan el proyecto de la revolución neoliberal. La relación entre la arqueología y los grandes capitales nacionales e internacionales es una cuestión que frecuentemente surge en la conversación informal, pero rara vez –y hace ya mucho tiempo de ello– aparece en la discusión pública (Cabeza 2001; Cáceres 1999; Cáceres y Westfall 2004; Carrasco 2006). Los problemas de la arqueología empresarial (poco impacto científico y social, escasa reflexión teóricometodológica, irregulares estándares de trabajo en el terreno y el laboratorio, condiciones de empleo precario) son reconocidas habitualmente por la mayoría de la colectividad profesional, y sobre todo por aquellos que más se desempeñan en “el impacto”. Sin embargo, no son muchos los esfuerzos por resolverlos en un contexto donde toda la atención se la lleva la competencia por captar los recursos de las empresas mandantes. Quizás un ejercicio a futuro sería comparar el volumen de financiamiento a la arqueología por parte de los sistemas empresarial y científico, en relación a su productividad en términos de aporte especializado y de divulgación al conocimiento arqueológico nacional.

Volviendo a la introducción de Falabella *et al.* (2016) a su edición compilatoria del estado actual de la arqueología chilena, podemos encontrar la confesión de que la arqueología chilena se encuentra en deuda con la sociedad, en términos de la divulgación y transmisión de los avances en el conocimiento sobre la prehistoria. Más allá de evaluar la justicia de dicha afirmación, se puede pensar que, para poder contraer una deuda, es preciso constituirse fuera de aquello con que se contrae la deuda, en este caso pensar la arqueología como algo dislocado de la sociedad civil, una comunidad científica autónoma. Pensarla, si se quiere, como un cuerpo intermedio entre la sociedad que podría recibir el conocimiento y el Estado (o el mercado) que financia su producción, y en tanto tal, atendiendo al proyecto guzmanista, necesariamente un espacio despolitizado. Autonomía y despolitización parecen ser conceptos que encajan bien entre sí, y que encajan además bien en la lectura de Orellana (1996) respecto de la historia de la arqueología como un proceso de desarrollo “natural” acelerado u obstaculizado por los vaivenes sociopolíticos externos.

Esto puede explicar que exista poca reflexión respecto a la relación entre arqueología y gran capital en el mercado del impacto ambiental, presentándose a través de la consultoría como un elemento externo que acude con pulcritud científico-técnica a cada trabajo específico, sin establecer una relación más íntima. La arqueología presentándose como una esfera autónoma que es llamada a intervenir en un espacio totalmente ajeno. Resulta evidente que esto es una ilusión, y que el trabajo arqueológico es cada vez más una parte integrante de la maquinaria empresarial y su contraparte estatal, con profesionales de planta en mineras, empresas energéticas, consultoras de envergadura, el Ministerio de Obras Públicas, etc., y con la mayor parte del contingente profesional dedicado a tiempo completo a este tipo de labores. En la otra cara, dado un sistema científico que fomenta las carreras y la producción individual por encima del desarrollo de programas de investigación, la comunidad académica se construye como una esfera independiente que aprovecha los recursos de uno u otro formato de investigación, sin reflexionar más profundamente cómo estos mismos inciden en la forma y el contenido de sus praxis individuales, colectivas, ni su relación con el resto de la sociedad. Lo mismo se postula a un proyecto FONDECYT (*Fondo Nacional de Desarrollo Científico*

6 Servicio de Evaluación Ambiental (2020).

y *Tecnológico* 2020), a los Fondos de Cultura (*Fondos de Cultura* 2020), o a proyectos internacionales (v.g. National Geographic Society, Wenner-Gren Foundation), de acuerdo a las características de cada fondo y las capacidades y escenario contingentes. En otras palabras, los investigadores se enfrentan a las alternativas del sistema de financiamiento como condiciones dadas sobre las cuales desplegar estrategias de apropiación para satisfacer sus objetivos –científicos, profesionales, intelectuales– particulares. Por supuesto, existen programas de investigación relativamente colectivos y relativamente a largo plazo, pero parece sensato argumentar que son escasos, y que suelen resultar de la agregación estratégica de carreras individuales, o bien sostenerse sobre la carrera de un investigador de prestigio que conduce un equipo en procesos formativos. La caracterización más específica implicaría un estudio dedicado, y lo anterior no está dirigido a menoscabar los proyectos de investigación más o menos colectivos, y más o menos individuales, sino a plantear la problemática de cómo los modelos de financiamiento estructuran la planificación y el ejercicio científico. Volviendo a Bourdieu, en ambas esferas –mercado y academia–, en general la comunidad arqueológica parece querer operar como un espacio independiente que accede a uno u otro recurso para la acumulación individual de capital económico y científico, según el caso. Pero como parece observarse en trabajos recientes, el afán de instrumentalización de los espacios parece fracasar y simplemente integrarse a los mecanismos de reproducción del capital (Adán *et al.* 2017; Carrión *et al.* 2015; Gurruchaga y Salgado 2017; Salazar *et al.* 2017).

Como bien sabemos en arqueología, el estudio de los procesos históricos de formación de las condiciones contemporáneas constituye una herramienta central en su desnaturalización, y luego en la búsqueda de formas para superarlas. El panorama delineado en los últimos párrafos es excesivamente generalizante y oculta casos que podrían sostenerse como argumentos para desacreditar la lectura que presento. Sin duda, la inquietud por corregir las debilidades puntuales de los sistemas de investigación y mercado existe, y esta se expresa en diversas iniciativas de divulgación, recuperación y educación patrimonial, trabajo con comunidades indígenas, entre otras. El asunto es que, muy en línea con la aproximación chilena a las injusticias estructurales del sistema neoliberal, en su mayoría estas propuestas operan en los espacios menos considerados por el sistema establecido, pero no llegan a proponer formas o contenidos distintos que se constituyan como alternativas a la forma de hacer arqueología. En general, se trata de iniciativas en los márgenes del espacio ocupado por la arqueología más común (v.g. Campano *et al.* 2012; Fuenzalida 2011; Palma *et al.* 2015)–, o de experiencias apendiculares a proyectos ejecutados dentro de los marcos hegemónicos –áreas de difusión y patrimonio en FONDECYT, compensaciones de proyectos de inversión (v.g. Munita *et al.* 2016; Silva *et al.* 2017). ¿Cómo pensar entonces en posibilidades de superación?

## Conclusiones

Así las cosas, podemos establecer un contraste entre el posicionamiento actual de la arqueología como una esfera independiente de la sociedad nacional, surgido a partir del proceso inaugurado por el Golpe de Estado, y las palabras que aprobara aquella sesión plenaria del primer congreso de CONICYT en 1971: “el futuro de la arqueología no es otro que el futuro de los chilenos”. Seguramente, ninguna de las dos posiciones conseguiría el apoyo unánime de sus contemporáneos, pero sin duda representan proyectos de desarrollo de la arqueología radicalmente distintos, anclados en dos períodos del devenir nacional cuya contradicción aún no está totalmente resuelta. El modelo que representa el documento de Montané y el Comité de Ciencias Humanas de la Unidad Popular ha sido derrotado por aquel de Miguel Kast y la constitución de Jaime Guzmán. Sin embargo la historia continúa.

Cuando comencé a escribir esta reflexión, a fines de agosto de 2018, la coyuntura nacional se encontraba revuelta y aparecían escaramuzas –declaraciones cruzadas, manifestaciones, guerras de redes sociales– que parecieron reflotar viejas polémicas que aparentemente muchos pensaban superadas. Aunque a primera vista estaban relativamente distantes de los senderos más frecuentes de la arqueología, se articulaban a partir de escenarios institucionales, individuales y teóricos que golpeaban, quizás medio de costado, nuestra puerta.

Primero, institucionales, porque el origen de la cuestión se daba por el nombramiento de un nuevo secretario para una de las carteras más relevantes para la arqueología: el flamante Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mauricio Rojas, un economista que llegaba con la vivencia de haber transitado desde el marxismo-leninismo del MIR (*Equipo de Reportajes* 2018; Pérez 2018)<sup>7</sup>, hacia el liberalismo de centro- derecha de la Fundación Para el Progreso, y que se subió de un salto al podio histórico de carreras breves en la administración pública, debió renunciar cuando algún afilado adversario recordó que había publicado, junto con Roberto Ampuero, escritor que realizó el mismo tránsito político, un libro de conversaciones en que expresaba que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos:

“más que un museo (...) se trata de un montaje, cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar (...). Es un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional que a tantos nos tocó tan dura y directamente” (Ampuero y Rojas 2015: 43).

Como segundo llamado a nuestra disciplina, el gobierno nombró en su reemplazo a una arqueóloga y miembro de la Sociedad Chilena de Arqueología, Consuelo Valdés Chadwick, cuyo currículum de varias décadas vinculado a la administración de museos pareció, a todas luces, más adecuado para las características de la institución que debía presidir.

Todo lo anterior resulta más bien anecdótico, mas no así la polémica que se proyectó a partir de ello. La renuncia y las declaraciones parecían anacrónicas en un Chile que daba por superada la transición, y en el que incluso el partido Unión Demócrata Independiente había cambiado –a la sazón pocas semanas antes– su declaración de principios para alinearse en el respeto a los DD.HH. Por el contrario, trajeron una discusión que superó ampliamente la anécdota de la efímera carrera ministerial y su sucesora, salió de la oficina y se trasladó al espacio público, a las organizaciones políticas y sociales, al Congreso, a La Moneda, y luego a la academia. Ésta tuvo su origen en torno a una crítica al contenido del Museo de la Memoria: la ausencia de contexto al momento de relatar el desarrollo histórico del Golpe de Estado de 1973 y las violaciones a los DD.HH. que lo sucedieron. Sectores de la derecha pinochetista –y no sólo de derecha– reclamaron la necesidad de mostrar cómo el tránsito de la Unidad Popular habría provocado una ruptura social y democrática que desembocó en la represión desatada por la Junta Militar (Jara 2018). Otros, relacionados al mundo castrense y policial, exigieron la integración de los uniformados muertos por la violencia política dentro del relato, como víctimas de la extrema izquierda (Desbordes 2018). Cuadros progresistas vinculados genealógicamente con la izquierda reprimida en Dictadura, defendieron su derecho prioritario al ejercicio de la memoria histórica, y atacaron la idea del contexto, pues a su juicio relativizaba los in-relativizables DD.HH. (*Biobio* 2018; Brodsky 2018).

---

<sup>7</sup> Andrés Pascal Allende y otros miristas desmintieron la supuesta afiliación de Rojas al partido, pero su veracidad parece poco importante, dado el amplio catálogo chileno de conversos hacia uno y otro lado en las últimas cuatro décadas

En ese marco, Sebastián Piñera re-anunció un elemento de su programa de gobierno que había pasado relativamente desapercibido: la creación de un Museo de la Democracia (Piñera 2017). Esto fue interpretado por parte de la izquierda como una estrategia de empate, la instalación de un discurso que podría hacer el peso al del Museo de la Memoria, contando la historia en una falsa perspectiva que pusiese la defensa de la democracia como el valor supremo que explica el último tramo del siglo XX y sus horrores (*El Mostrador* 2018; Gálvez 2018). En términos concretos, situar el ejercicio del terrorismo de Estado como legítimo –o al menos entendible– al haberse ejercido para salvar la democracia amenazada. Otros pensaron que sería interesante discutir las formas democráticas que se habían desarrollado en el país, desde el voto censitario en el siglo XIX, la democracia parlamentaria de principios del XX, la República y su fractura en 1973, la democracia protegida del pinochetismo, y hasta la democracia liberal inaugurada por las reformas laguistas (Ahumada 2018; Alvarado 2018). Quizás sorprendentemente, parecía que el proyecto original de Piñera trataba sobre todo del proceso del plebiscito y la transición desde 1988, pero se iba transformando conforme distintas voces sugerían lo que debía incluir la institución.

Aun así, estas disquisiciones sobre DD.HH. y valores democráticos, si bien centrales para pensar la sociedad que construimos y los escenarios contemporáneos de disputa política, parecen relativamente tangenciales al ejercicio habitual de nuestra arqueología. El punto de contacto más obvio entre nuestra disciplina y la historia política reciente podría ser la aún incipiente Arqueología de la Dictadura, tanto en su faceta forense como en la de investigación (Cáceres 2011; Fuenzalida 2011, 2017; Fuenzalida y Sierralta 2016; San Francisco *et al.* 2010; Seguel *et al.* 2013), pero en este caso no era el legítimo ejercicio de la persecución de la verdad histórica lo que se ponía en cuestión, sino cómo sobre esa verdad se construía una narrativa histórica del presente nacional.

Por eso, lo que despertó mi interés en relación con la arqueología chilena fue la forma en que la oposición de lecturas sobre nuestra historia reciente configuraba posiciones respecto de la forma y el contenido de esa historia que debía ser contada. O, dicho de otro modo, que pese a la ilusión de que la transición había terminado, y con ello la disputa política dejaba de girar en torno a las trincheras establecidas por la Guerra Fría y su expresión específica en Chile desde 1973, al removerse las aguas despertaban las mismas disposiciones atávicas que estructuraron el escenario durante los últimos 50 años. La reactivación en el escenario público del debate respecto de la interpretación de la historia y las consecuencias que esta tiene en el desarrollo de la sociedad. Y, más concretamente, preguntarnos cómo las condiciones políticas y sociales de las últimas cuatro décadas estructuraban la forma en que hoy nos desenvolvemos.

El camino recorrido en estas páginas ha pretendido tener como hilo conductor y provocador la eliminación de la certidumbre sobre el carácter necesario del cómodo estado actual en el que nos encontramos en la arqueología. Deberíamos por lo tanto seguir a Bourdieu, en su llamado a conocer para

“situar sus responsabilidades allí donde se sitúan realmente sus libertades, y a rehusar obstinadamente las cobardías y los abandonos infinitesimales que le dejan toda su fuerza a la necesidad social, a combatir en sí mismo y en los otros la indiferencia oportunista o el conformismo desengañado que le concede al mundo social aquello que él reclama, todas las naderías de la complacencia resignada y de la complicidad sumisa” (Bourdieu 1984 [2014]: 15).

Habitualmente, al abordar el problema de la escasa penetración del discurso arqueológico en el público general, existe un diagnóstico respecto al poco interés que estos temas despiertan, a la escasa habilidad de los arqueólogos en las tareas de divulgación, y por supuesto a la pasividad de los investigadores que prefieren dedicarse a cuestiones más académicas. Aunque estas razones sean en algún grado correctas, podríamos preguntarnos si vale la pena esperar que una arqueología que se construye como una esfera autónoma respecto de la sociedad puede generar un vínculo a posteriori con ella. ¿Cuáles son los vínculos territoriales de nuestra práctica? ¿cuál el origen de los problemas que guían la investigación? ¿cuál es la posición y el rol (i.e. para quién se juega) en la estructura económica de la arqueología empresarial? Para Marx (1857 [2006]), las condiciones del consumo se encuentran determinadas por las condiciones de la producción, una identidad dialéctica que no está de más volver a traer a colación.

Por eso he tratado de argumentar a favor de la necesidad de reconstruir más acuciosamente el tránsito histórico que dejó a la arqueología en su estado actual, centrándome particularmente en el Golpe de Estado como hito fundante del Chile contemporáneo. Esto no por el mero afán de la documentación y la obsesión detallista que suele absorbernos en las ciencias históricas -la arqueografía que quería combatir Luis Lumbreras (Kelly *et al.* 2019)-, sino porque examinar las condiciones concretas de desarrollo de la disciplina, quizás transparente como llegó nuestra práctica a estar dominada por las lógicas de la individualidad, la inmediatez, la competencia, la explotación de la fuerza de trabajo. Verlo en términos reales para entender, por ejemplo, como la pérdida de investigadores como Guacolda Boisset, Bernardo Berdichewsky o Julio Montané, o la desaparición de las escuelas provinciales de arqueología de principios de los setenta, no sólo implicaron una ralentización del desarrollo científico, sino que fueron la forma de establecer una tabla rasa donde construir una arqueología alineada con el nuevo Chile.

Por último, en esta mirada generalista he dejado de lado partes de la historia cuya omisión es insoslayable. Sería necesario abordar con perspectiva feminista cómo la distribución y valorización desigual de las tareas se ha establecido en esta arqueología y en la anterior, cómo -muy posiblemente- sostiene el sistema de reproducción del capital científico y económico, y cómo se han transformado estas relaciones en las últimas décadas (v.g. Kirkwood 1983). El ya mencionado trabajo recopilatorio de las experiencias de arqueólogas desde los años sesenta que ya ha presentado preliminarmente el Centro de Estudios Aikén, se perfila como un aporte significativo en este sentido (Brinck *et al.* 2019). La relación entre los arqueólogos y las comunidades indígenas, por otro lado, ha sido prolíficamente abordada por Patricia Ayala (2008, 2010, 2015, 2017), sobre todo para la arqueología del Norte Grande, y sin duda debiera ser mucho más incorporada a la lectura toda vez que el conflicto indígena es central en el Chile contemporáneo.

Hoy en día la arqueología chilena, salvo excepciones notables, carece de programas de investigación con horizontes de largo plazo, y carece también de una inserción territorial que permita un vínculo real con las comunidades que habitan el área de estudio, en el sentido en que lo promovían los jóvenes arqueólogos del Norte Grande hace cuatro décadas (Montané *et al.* 1972). Abunda la multidisciplinariedad, pero escasean las investigaciones que puedan realmente ser atribuidas a colectivos de trabajo como lo fue la experiencia excepcional del grupo Toconce a principios de la década de los ochenta (Aldunate y Castro 1982; Castro *et al.* 1979, 2016). La mayoría del contingente profesional se desempeña en condiciones de empleo precario como mano de obra calificada al servicio del gran capital nacional y extranjero. Como todos los procesos históricos, este no es un devenir casual, y muy posiblemente su comprensión más cabal al escarbar bajo las

imágenes superficiales que he intentado presentar en esta suerte de prospección. Sólo entonces podremos pensar en las estrategias para su superación: el posicionamiento clasista de los trabajadores de la arqueología, la crítica activa -praxis- al sistema de financiamiento y producción científica, y en general la reincorporación de la disciplina a la sociedad en general.

*Agradecimientos:* A dos revisoras anónimas y a Mauricio Massone, cuyos comentarios contribuyeron significativamente a enriquecer esta reflexión. Igualmente, a Constanza Cortés y Nicole Fuenzalida por sus comentarios a las distintas versiones previas del manuscrito. A mis compañeras y compañeros del Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos Aikén, cuyo trabajo de casi una década es el seno en que reside el origen de esta reflexión.

## Referencias Citadas

- Adán, L., G. Politis, M. Sepúlveda y H. Tantaleán. 2017. Arqueología, productividad científica y política en Chile. *Revista Chilena de Antropología* 35:218-233.
- Ahumada, M.J. 2018. Joaquín Fernandois, historiador: “La derecha se ha quedado callada 40 años y perdió la batalla de las ideas sobre el 73”. *La Tercera*, Reportajes, 25 de agosto de 2018. <https://www.latercera.com/reportajes/noticia/joaquin-fermandois-historiador-la-derecha-se-ha-quejado-callada-40-anos-perdio-la-batalla-las-ideas-73/294729/> (1 julio 2020)
- Aldunate, C. y V. Castro. 1982. *Las chullpa de Toconce y su relación con el poblamiento altiplánico en el Loa Superior período Tardío*. Ediciones Kultrún, Santiago.
- Ampuero, R. y M. Rojas. 2015. *Diálogo de conversos*. Editorial Sudamericana, Santiago.
- Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID). 2020. *Compendio Estadístico 2015/2019*. Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Santiago.
- Alvarado, C. 2018. Museo de la Democracia: la clave es la justificación”. *La Tercera*, 25 de agosto de 2018. <https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-clave-la-justificacion/295054/> (1 julio 2020)
- Ávalos, H. y B. Ladrón de Guevara. 2000. El patrimonio cultural como bien de consumo: el caso Petorca. *Conserva* 4:87-114.
- Ayala, P. 2007. Relaciones entre atacameños, arqueólogos y Estado en Atacama (norte de Chile). *Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas* 33:133-157.
- Ayala, P. 2008. *Políticas del pasado: indígenas, arqueólogos y Estado en Atacama*. Universidad Católica del Norte, Antofagasta.
- Ayala, P. 2010. Las relaciones con el otro indígena en la arqueología atacameña. En: *Pueblos indígenas y arqueología en América Latina*, compilado por C. Gnecco y P. Ayala, pp. 189-220. Universidad de Los Andes, Bogotá.
- Ayala, P. 2014. Patrimonialización y arqueología multicultural en San Pedro de Atacama (norte de Chile). *Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas* 49:69-94
- Ayala, P. 2015. O multiculturalismo neoliberal e a arqueología de contrato no norte de Chile. *Revista de Arqueología* 28(2):155-171.
- Ayala, P. 2017. Arqueología y pueblos indígenas: los casos Aymara, Atacameño, Mapuche y Rapa Nui. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 47:69-92.
- Ballester, B. 2016a. No necesitamos fronteras: comentarios tres décadas después. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 46:97-129.

- Ballester, B. 2016b. Memorias de té: conversaciones con Guacolda Boisset Mujica. *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 48(3):359-364.
- Bate, F. 1971. Material lítico: metodología de clasificación. *Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural* 181-182:3-24.
- Bate, F. 1974. *Orígenes de la comunidad primitiva en Patagonia*. Ediciones Cuicuilco, México D.F.
- Berdichewsky, B. 1963. Culturas precolombinas de la costa central de Chile. *Antropología* 1:17-33.
- Berdichewsky, B. 1964. Arqueología de la desembocadura del Aconcagua y zonas vecinas de la costa central de Chile. *Actas del III Congreso Internacional de Arqueología Chilena*, pp. 109-124. Sociedad de Arqueología e Historia "Dr. Francisco Fonck", Viña del Mar.
- Berenguer, J. 1983. Redefiniendo la arqueología. *Arqueología y ciencia: Primeras jornadas*, pp. 103-126. Museo Nacional de Historia Natural, Santiago de Chile.
- Berenguer, J. 1986. Nuevas fronteras de la Arqueología. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 4:11-15.
- Berenguer, J. 1995. Presentación. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* Número Especial: i-iii.
- Berenguer, J. (ed.) 1997. *Chile antes de Chile*. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago.
- Berenguer, J. 2014. Memorias y desmemorias de un estudiante de arqueología de fines de los 60 y comienzos de los 70. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 43/44:67-71.
- Berenguer, J. 2016. Sentir que nada es igual, pero que todo es lo mismo: de lo sólido a lo líquido en la arqueología chilena. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 46:107-115.
- Biobio*. 2018. Zurita por dichos de Rojas sobre Museo de la Memoria: Negar es tan grave como lo sucedido. 13 de agosto de 2018.  
<https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/entrevistas/2018/08/13/zurita-por-dichos-de-rojas-sobre-museo-de-la-memoria-negar-es-tan-grave-como-lo-sucedido.shtml> (1 julio 2020)
- Boisset, G. y A. Llagostera. 1971. Fechas radiocarbónicas de Caleta Abtao - Comparación con otras fechas de sitios costeros. *Resúmenes del VI Congreso Nacional de Arqueología Chilena*. Universidad de Chile, Santiago.
- Bourdieu, P. 1984 [2014]. *Homo Academicus*. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
- Brinck, A., N. Fuenzalida, F. Moya y C. Dávila. 2019. *Mujeres en la formación de la carrera de Arqueología en la Universidad de Chile: de la ausencia discursiva institucional hacia la relevancia de la experiencia femenina (1960-1980)*. Ponencia presentada en simposio Mujeres en la arqueología. Pasado, presente y futuro, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Lima, Perú.
- Brodsky, R. 2018. El Museo de la Memoria ¿atrapados sin salida? *Cooperativa*, Opinión, 13 de agosto de 2018  
<https://opinion.cooperativa.cl/opinion/derechos-humanos/el-museo-de-la-memoria-atrapados-sin-salida/2018-08-13/100755.html> (1 julio 2020)
- Cabeza, A. 2001. Evaluating the environmental impact of development projects on the archaeological heritage of Chile. *Conservation and Management of Archaeological Sites* 4(4):245-47.
- Cáceres, I. 1999. Arqueología y sistema de evaluación de impacto ambiental. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 28:47-54.
- Cáceres, I. 2011. *Detenidos desaparecidos en Chile: Arqueología de la muerte negada*. Memoria para optar al título de arqueólogo, Departamento de Antropología, Universidad de Chile, Santiago.
- Cáceres, I. y C. Westfall. 2004. Trampas y amarras: ¿es posible hacer arqueología en el sistema de evaluación de impacto ambiental? *Chungara, Revista de Antropología Chilena* Volumen Especial:483-488.

- Campano, M.A., M.J. Herrera y R. Retamal. 2012. *Los primeros santiaguinos: 10.000 años de prehistoria visto a través de su funebria*. Santiago de Chile.
- Carrasco, C., 2006. La práctica arqueológica y la actual construcción del conocimiento arqueológico en Chile. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 39:35-49.
- Carrión, H., C. Dávila, A. Delgado, N. Fuenzalida, P. Kelly, F. Moya, S. Rebolledo, S. Sierralta, J. Sepúlveda y C. González. 2015. Evaluación de la Arqueología Social en Chile: desarrollo histórico y revisión crítica del proyecto disciplinar. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 45:95-114.
- Cartajena, I., B. Rivera, P. López y B. Santander. 2014. Introducción de taxones domésticos y control de camélidos en el norte semiárido: variabilidad osteométrica en el valle del Mauro, IV Región, Chile. *Revista Chilena de Antropología* 30:98-103.
- Castro, V. 2014. Trazas de los '60 a los '70. Entre la primavera y la tormenta. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 43/44:79-83.
- Castro, V. y P. Núñez. 1995. Mesa de la generación de los '70. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* Número Especial:13-27.
- Castro, V., J. Berenguer y C. Aldunate. 1979. Antecedentes de una interacción altiplano-área atacameña durante el Período Tardío: Toconce. *Actas del 7º Congreso de Arqueología de Chile* (Altos de Vilches 1977), pp. 477-498. Ediciones Kultrún, Santiago.
- Castro, V., C. Aldunate y J. Berenguer. 2016. *Etnoarqueologías andinas*. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago.
- Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). 2019. *Memoria de Gestión octubre 2015 – diciembre 2018. Programa Formación de Capital Humano Avanzado PFCHA*. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Ministerio de Educación, Santiago.
- Cornejo, L. 1997. Buscadores del pasado. Una breve historia de la arqueología chilena. En: *Chile antes de Chile, Prehistoria*, editado por J. Berenguer, pp. 9-16. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago.
- Cornejo, L. 2017. Productividad e impacto de la arqueología chilena: una perspectiva cuantitativa. *Revista Chilena de Antropología* 35:164-185.
- Cortés, A. El contra-ciclo político chileno: asincronías y contra-tendencias frente a la política latinoamericana. *Revista de la Red de Intercatedras de Historia de América Latina Contemporánea* 8:92-100.
- Desbordes, M. 2018. Museo de la Memoria. *La Tercera*, Opinión, 14 de agosto de 2018. <https://www.latercera.com/opinion/noticia/museo-la-memoria/281240/> (1 julio 2020)
- El Mostrador*. 2018. Ricardo Lagos apunta el dedo contra el Museo de la Democracia y señala que responde a la 'teoría del empate'. 20 de agosto de 2018. <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/08/20/ricardo-lagos-apunta-el-dedo-contra-el-museo-de-la-democracia-y-senala-que-responde-a-la-teoria-del-empate/> (1 julio 2020)
- Endere, M.L. y R. Curtoni. 2006. Entre lonkos y ólogos. La participación de la comunidad Rankülche de Argentina en la investigación arqueológica. *Arqueología Sudamericana* 2(1):72-92.
- Equipo de Reportajes*. 2018. Histórico secretario del MIR desconoce militancia de Mauricio Rojas. *La Tercera*, Reportajes, 12 de agosto de 2018. <https://www.latercera.com/reportajes/noticia/historico-secretario-general-del-mir-desconoce-militancia-mauricio-rojas/278351/> (1 julio 2020)
- Falabella, F., L. Sanhueza, M. Uribe, C. Aldunate y J. Hidalgo (eds.). 2016. *Prehistoria en Chile. Desde sus primeros habitantes hasta los Incas*. Editorial Universitaria, Santiago.

- Fernández, C. y L. Cornejo. 1983. El problema arqueológico al sur del río Cachapoal: una estrategia de investigación. *Arqueología y Ciencia, Primeras Jornadas*, pp. 142-156. Museo Nacional de Historia Natural, Santiago.
- Fondos de Cultura. 2020. <https://www.fondosdecultura.cl/> (1 julio 2020)
- Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. 2020. <https://www.conicyt.cl/fondecyt/> (1 julio 2020)
- Franco, N. 2017. La relación entre los estudios de impacto ambiental e investigaciones arqueológicas entre los años 2006 y 2016 en la Provincia de Santa Cruz (Argentina). *Práctica Arqueológica* 1(1):31-45.
- Fuenzalida, N. 2011. Cuartel Terranova, análisis de la configuración espacial en relación a las estrategias de represión y control de detenidos y torturados. *Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología* 7:49-63.
- Fuenzalida, N. 2017. Apuntes para una arqueología de la Dictadura chilena. *Revista Chilena de Antropología* 35:131-147.
- Fuenzalida, N. y S. Sierralta. 2016. Panfletos y murales: la resistencia popular a la Dictadura chilena (1980-1990). *Revista de Arqueología* 29(2):96-115.
- Gálvez, C. 2018. Presidenta de la Cámara critica el Museo de la Democracia de Piñera: "Se ve como un empate". *Emol*, 25 de agosto de 2018.  
<https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/25/918289/Presidenta-de-la-Camara-critica-el-Museo-de-la-Democracia-de-Pinera-Se-ve-como-un-empate.html> (1 julio 2020)
- Gallardo, F. 1983. La arqueología, una ciencia social? *Arqueología y Ciencia, Primeras Jornadas*, pp. 90-102. Museo Nacional de Historia Natural, Santiago.
- Garbulsky, E. 1998. La antropología en la Universidad de Concepción (1967-1973). Apuntes de un participante. *III Congreso Chileno de Antropología*, pp. 200-210. Colegio de Antropólogos de Chile A. G., Concepción.
- Garretón, M.A. 2016. *La Gran Ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. LOM, Santiago.
- Gaudichaud, F. 2015. *Las fisuras del neoliberalismo maduro chileno*. CLACSO, Buenos Aires.
- Gómez, P. y A. Pacheco. 2016. Movilidad y dieta en el valle de El Mauro (31° 57'S.-71° 01'W.), Norte Semiárido de Chile, entre 8350-929 CAL. AP. *Comechingonia* 20(1):51-79.
- González, P. 2017. *Sitio El Olivar: su importancia para la reconstrucción de la prehistoria de las comunidades agroalfareras del norte semiárido chileno*. Colecciones Digitales, Subdirección de Investigación Dibam. <https://www.museoarqueologicolaserena.gob.cl/632/w3-article-83572.html> (1 julio 2020)
- Gurruchaga, A. y M. Salgado. 2017. Publicación científica bajo criterios hegemónicos: explorando la realidad arqueológica chilena. *Revista Chilena de Antropología* 35:148-163.
- Jara, A. 2018. Presidenta de la UDI tras renuncia de Mauricio Rojas: "Uno no iba imaginar la odiosidad de la izquierda". *La Tercera*, 13 de agosto de 2018.  
<https://www.latercera.com/politica/noticia/presidenta-la-udi-tras-renuncia-mauricio-rojas-uno-no-iba-imaginar-la-odiosidad-la-izquierda/280246/> (1 julio 2020)
- Kelly, P., N. Fuenzalida, S. Sierralta, S. Rebolledo, N. Águila y J. Sepúlveda. 2019. "Si la arqueología no me sirve para entender lo que pasa en mi país ahora, de verdad no vale la pena". Entrevista a Luis Guillermo Lumbreras. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 49:63-78.
- Kirkwood, J. 1983. *El feminismo como negación del autoritarismo*. FLACSO, Santiago de Chile.
- López, P., I. Cartajena, B. Santander, B. Rivera, y C. Opazo. 2012. Explotación de camélidos de un sitio Intermedio Tardío (1.000-1.400 dC) y Tardío (1.400-1.536 dC) del Valle de Mauro (IV Región, Chile). *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 41/42:91-108.

- López, P., I. Cartajena, B. Santander, D. Pavlovic y D. Pascual. 2015. Camélidos domésticos en el Valle de Mauro (Norte Semiárido, Chile): múltiples análisis para un mismo problema. *Intersecciones en Antropología* 16(1):101-114.
- Lorenzo, J., L. Lumbreras, E. Matos, J. Montané y M. Sanoja. 1979. Hacia una arqueología social. *Nueva Antropología* III(12):65-92.
- Mansuy, D. 2016. Notas sobre política y subsidiariedad en el pensamiento de Jaime Guzmán. *Revista de Ciencias Políticas* 36(2):503-521.
- Martinic, M. 2009. Origen y desarrollo del Instituto de la Patagonia. Una perspectiva de cuarenta años. *Magallania* 37(1):5-6.
- Marx, K. 1857 [2006]. *Introducción general a la crítica de la economía política*. Siglo XXI Editores, México D.F.
- Massone, M. 2014. Recuerdos de un alumno de arqueología perteneciente a la generación de 1971. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 43/44:61-65.
- Méndez, C. 2008. Cadenas operativas en la manufactura de arte rupestre: un estudio de caso en El Mauro, valle cordillerano del Norte Semiárido de Chile. *Intersecciones en Antropología* 9:145-155.
- Monckeberg, M. O. 2017. *El poder de la UDI. 50 años de gremialismo en Chile*. Editorial Debate, Santiago.
- Monleón, J. 1976. *Los Araucanos: Etnohistoria y Arqueología*. Tesis para obtener la licenciatura en Prehistoria, Universidad de Chile, Santiago.
- Monsálvez, D. 2016. La historia reciente en Chile: un balance desde la nueva historia política. *Historia* 396:111-139.
- Montané, J. 1964. Fechamiento tentativo de las ocupaciones humanas en dos terrazas a lo largo del litoral chileno. *Actas del III Congreso Internacional de Arqueología Chilena*, pp. 109-124. Sociedad de Arqueología e Historia "Dr. Francisco Fonck", Viña del Mar.
- Montané, J. 1967. Investigaciones interdisciplinarias en la ex laguna de Tagua Tagua, Provincia de O'Higgins, Chile. *Revista Universitaria* LII:165-167.
- Montané, J. 1968a. Datación de una terraza fluvial por métodos arqueológicos. *Rehue* 1:13-22.
- Montané, J. 1968b. Paleo-indian remains from Laguna de Tagua Tagua, Central Chile. *Science* 161(3846):1137-1138.
- Montané, J. 1972. La arqueología chilena: su estado actual y perspectivas de desarrollo en la etapa del tránsito hacia el socialismo. Su futuro. En: *Serie Documentos de Trabajo* 3, pp. 2-4. Programa de Arqueología y Museos, Universidad de Chile, Antofagasta.
- Montané, J., P. Núñez, V. Zlatar, L. Núñez, B. Marinov, J. Salazar, N. Vergara y B. Bustos. 1972. La arqueología en el norte de Chile: su estado y perspectiva de desarrollo en el tránsito hacia el socialismo. En: *Informe presentado en la Comisión de Ciencias Humanas del 1er Congreso de Científicos organizado por CONICYT*, pp. 5-12. Santiago de Chile.
- Moulián, T. 1997. *Chile actual, anatomía de un mito*. LOM-ARCIS, Santiago.
- Munita, D., R. Mera, R. Álvarez, C. García y P. García. 2016. Investigación, conservación y educación patrimonial como compensación de daños en los sitios arqueológicos de bahía Ilque. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 46:71-84.
- Muñoz, M. y C. Blanco. 2013. Una taxonomía de las universidades chilenas. *Calidad en la educación* 38:181-213.
- Núñez, L. 1969. Nuevas perspectivas de la arqueología en Checoslovaquia. *Boletín de la Universidad de Chile* 91:26-31.
- Núñez, L. 1974. *La agricultura prehistórica en los Andes meridionales*. Editorial Orbe, Santiago.

- Núñez L. 2014. Homenaje póstumo a Julio Montané Martí. *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 46(4):535-542.
- Núñez, L. 2015. *Avísale, Freddy. Historia de un hombre y sus razones 1943-1973*. LOM Ediciones, Santiago.
- Núñez, L. y T. Dillehay. 1978 [1995]. *Movilidad giratoria, armonía social y desarrollo en los Andes meridionales: Patrones de tráfico e interacción económica*. Universidad Católica del Norte, Antofagasta.
- Orellana, M. 1982. *Investigaciones y teorías en la Arqueología de Chile*. Centro de Estudios Humanísticos, Universidad de Chile, Santiago.
- Orellana, M. 1991. Reflexiones sobre el desarrollo de la Arqueología en Chile. *Revista Chilena de Antropología* 10:11-23.
- Orellana, M. 1995. Punta de Tralca. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 21: 41-44.
- Orellana, M. 1996. *Historia de la Arqueología en Chile*. Bravo y Allende Editores, Santiago.
- Palma, G., S. Rebolledo y P. Kelly. 2015. Registro y contextualización de la colección de vasijas del Lof Llaguepulli, Puerto Domínguez (Lago Budi). *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 45:59-79.
- Pérez, E. 2018. Conversos y montajes: sobre la itinerancia de Rojas y Ampuero. *El Mostrador*, 4 de octubre de 2018.  
<https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/10/04/conversos-y-montajes-sobre-la-itinerancia-de-rojas-y-ampuero/> (1 julio 2020)
- Pimentel, G., A. Garcés, S. Kuzminsky, C. Agüero y L. Núñez. 2016. Editorial. El conocimiento en disputa. Algunas observaciones sobre cienciometría, sistemas de acceso y ciencia social latinoamericana. *Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas* 53: 3-9.
- Piñera, S. 2017. *Programa de Gobierno 2018-2022. Construyamos tiempos mejores para Chile*.  
<http://www.sebastianpinera.cl> (1 julio 2020)
- Politis, G. 2003. The theoretical landscape and the methodological development of archaeology in Latin America. *American Antiquity* 68(2):245-272.
- Rivera, M. 1972. Comité de Arqueología del Norte (C.O.D.A.N.). En: *Serie Documentos de Trabajo* 3 pp. 13-14. Programa de Arqueología y Museos, Universidad de Chile, Antofagasta.
- Rubio, G. 2012. El pasado reciente en la experiencia chilena. Bases para una pedagogía de la memoria. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)* XXXVIII(2):375-396.
- Rufinelli, A. y A. Guerrero. 2009. Círculo de segmentación del sistema educativo chileno: destino laboral de egresados de Pedagogía en Educación Básica. *Calidad de la Educación* 31:20-44.
- Salazar, D., D. Jackson y A. Troncoso. 2012. Entre dos tierras: reflexiones sobre la arqueología chilena en el siglo veintiuno. En: *Teoría arqueológica en Chile: reflexionando en torno a nuestro quehacer disciplinario*, editado por P. Ayala y F. Vilches, pp. 41-71. Línea Editorial IIAM-UCN, Ocho Libros, Santiago.
- Salazar, D., R. Alvar, R. González, D. Hernández, H. Ramírez, F. Vega y S. Yrarrázaval. 2017. Ciencia y política en la arqueología chilena: el caso de Fondecyt. *Revista Chilena de Antropología* 35:186-217.
- San Francisco, A., M. Fuentes y J. Sepúlveda. 2010. Hacia una arqueología del estadio Víctor Jara. Campo de detención y tortura masiva de la Dictadura en Chile (1973-1974). *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana* 4:91-116.
- Santander, B. y P. López. 2012. Análisis de microhuellas de uso mediante Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) de artefactos óseos de un sitio Arcaico tardío del valle de Mauro (Región de Coquimbo, Chile): Aportes para una reconstrucción contextual. *Revista Chilena de Antropología* 26:129-150.

- Santoro, C., V. Standen, D. Angelo y V. Gavilán. 2013. Editorial. Internacionalización de revistas científicas en campos emergentes como antropología: desafíos y oportunidades para Chungara. *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 45(3):367-369.
- Seguel, R., E. Roubillard, F. Espinoza y A. Escobar. 2013. *Prospección exploratoria para la búsqueda, recuperación y análisis de evidencia cultural y biológica asociada a la ocupación del inmueble de Londres 38, con especial énfasis en el período septiembre 1973 – septiembre 1974*. Centro Nacional de Conservación y Restauración, Santiago.
- Servicio de Evaluación Ambiental (2020). Información de Proyectos Ingresados al SEIA. <http://www.sea.gob.cl/documentacion/reportes/informacion-de-proyectos-ingresados-al-seia> (1 julio 2020)
- Sierralta, S. 2017. La arqueología chilena en el Gulumapu: narrativa histórica en una zona de conflicto. *Revista Chilena de Antropología* 36:255-274.
- Silva, E., C. Silva, N. La Mura, N. Fuenzalida y A. Brinck. 2017. Sentidos del patrimonio de los sitios arqueológicos Ruinas de Chada y Pucará de Chena (río Maipo, Chile Central): historia local y entorno social. *Intersecciones en Antropología* 18: 169-179.
- Suárez, L. y J. González. 1983. David L. Clarke: Proposición para una teoría arqueológica. *Arqueología y Ciencia, Primeras Jornadas*, pp. 127-141. Museo Nacional de Historia Natural, Santiago.
- Suárez, L., L. Cornejo y F. Gallardo (eds.). 1983. *Arqueología y Ciencia, Primeras Jornadas*. Museo Nacional de Historia Natural, Santiago.
- Troncoso, A., D. Salazar y D. Jackson. 2006. Hacia una retrospectiva de la teoría arqueológica en Chile: ¿Qué somos, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? En: *Puentes hacia el pasado: reflexiones teóricas en arqueología*, editado por A. Troncoso, D. Salazar y D. Jackson, pp. 217-243. Serie Monográfica de la Sociedad Chilena de Arqueología, Santiago.
- Troncoso, A., D. Salazar y D. Jackson. 2008. Ciencia, Estado y Sociedad: Retrospectiva crítica de la arqueología chilena. *Arqueología Suramericana* 4(2):122-145.
- Uribe, M. y L. Adán. 2003. Arqueología, poblaciones originarias y patrimonio cultural en el Desierto de Atacama. *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 35(2):295-304.
- Valdés, J. y Fauré, D. 2018. Historias locales, memoria social y la defensa de una metodología participativa: los Encuentros por la Memoria. *Espacios & Memorias* 3:45-56.
- Vásquez León, L. 2003. *El Leviatán arqueológico. Antropología de una tradición científica en México*. CIESAS, México D.F.
- Vidal, E. 2019. Discursos arqueológicos y la creación del tiempo universal en la prehistoria del desierto de Atacama, norte de Chile: reflexiones en torno a la construcción del pasado. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 49:7-26.
- Weibel, M. 2017. *Los niños de la rebelión*. Aguilar, Santiago.